

No. 29074

**MEXICO
and
ARGENTINA**

**Agreement on the transfer of sentenced nationals and the
execution of penal sentences. Signed at Buenos Aires on
8 October 1990**

Authentic text: Spanish.

Registered by Mexico on 30 July 1992.

**MEXIQUE
et
ARGENTINE**

**Accord relatif au transfèrement des ressortissants con-
damnés et à l'exécution des sentences pénales. Signé à
Buenos Aires le 8 octobre 1990**

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par le Mexique le 30 juillet 1992.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONA-
LES CONDENADOS Y COMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PE-
NALES

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, en adelante denominados "las Partes";

Deseosos de fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal;

Estimando que el objetivo de las penas es la reinserción social de las personas condenadas;

Considerando que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad,

Convienen lo siguiente:

ARTICULO I

1. Las penas impuestas en México a nacionales de la República Argentina podrán ser cumplidas en la Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

2. Las penas impuestas en la Argentina a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser cumplidas en México de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

3. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.

ARTICULO II

Para los fines de este Convenio se entiende que:

- a) "Estado Sentenciador" es la Parte que condenó al reo y de la cual el reo habrá de ser trasladado.
- b) "Estado Receptor" es la Parte a la cual el reo habrá de ser trasladado.
- c) "Reo" es la persona que está cumpliendo una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario.

ARTICULO III

Las Partes se comunicarán por la vía diplomática la autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en el presente Convenio.

ARTÍCULO IV

Para que se pueda proceder en la forma prevista por este Convenio, deberán reunirse las siguientes condiciones:

- a) que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no esté pendiente recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;
- b) que la condena no sea a la pena de muerte, a menos que esta haya sido conmutada;
- c) que la pena que esté cumpliendo el reo tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido fijada posteriormente por la autoridad competente;
- d) que la parte de la condena que faltare cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a dos años; y
- e) que el reo haya cumplido con el pago de multas, gastos de Justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria; o que garantice su pago a satisfacción del Estado sentenciador.

ARTICULO V

1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Convenio, y sobre las consecuencias jurídicas que se derivarían del traslado.

2. En caso que lo solicite, el reo podrá comunicarse con el Cónsul de su país, quien a su vez podrá contactar a la autoridad competente del Estado sentenciador, para solicitarle se preparen los antecedentes y estudio correspondientes del reo.

3. La voluntad del reo de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada por escrito. El Estado sentenciador deberá facilitar, si lo solicita el Estado receptor, que éste compruebe que el reo conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que dá el consentimiento de manera voluntaria.

ARTICULO VI

1. El pedido de traslado deberá ser efectuado por el Estado receptor al Estado sentenciador por la vía diplomática.

2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado receptor valorará el delito por el que el reo fue condenado, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que el reo tenga con la sociedad del Estado receptor, y toda otra

circunstancia que pueda considerarse como factor positivo para la rehabilitación social del reo en caso de cumplir la condena en el Estado receptor.

3. El Estado receptor tendrá absoluta discreción para proceder o no a efectuar la petición de traslado al Estado sentenciador.

ARTICULO VII

1. El Estado sentenciador analizará el pedido y comunicará su decisión al Estado receptor.

2. El Estado sentenciador podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la decisión.

3. Negada la autorización del traslado, el Estado receptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado sentenciador podrá revisar su decisión, a instancia del Estado receptor.

ARTICULO VIII

1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del reo y la forma en que se hará efectivo el traslado.

El Estado receptor será el responsable de la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2. El Estado receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos contraídos por el traslado o el cumplimiento de la condena en su territorio.

3. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor los testimonios de sentencia y demás documentación que pueda necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado receptor.

4. Si el Estado receptor considera que los informes proporcionados por el Estado sentenciador no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.

5. A solicitud del Estado sentenciador, el Estado receptor proporcionará informes sobre el estado de la ejecución de la sentencia del reo trasladado conforme al presente Convenio, incluyendo lo relativo a su libertad condicional o preparatoria.

ARTICULO IX

El reo trasladado no podrá ser nuevamente enjuiciado en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado sentenciador y su posterior traslado.

ARTICULO X

1. El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.

2. Sólo el Estado sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.

3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado receptor informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado sentenciador produce la decisión adoptada.

4. El Estado receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.

ARTICULO XI

La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento y revocación de la libertad condicional o preparatoria, anticipada o vigilada.

ARTICULO XII

Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de

libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.

ARTICULO XIII

1. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de la libertad condicional o preparatoria, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado receptor.

2. La autoridad judicial del Estado sentenciador solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se diligenciará por la vía diplomática.

3. Para los efectos del presente Artículo, la autoridad judicial del Estado receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevan a cabo, y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que haya asumido.

ARTICULO XIV

Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de imitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor.

ARTICULO XV

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Convenio.

ARTICULO XVI

Este Convenio será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor.

ARTICULO XVII

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última nota diplomática por la que las Partes se notifiquen haber cumplimentado los requisitos constitucionales respectivos.

2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual los representantes de las Partes, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en Buenos Aires, a los ocho días del mes de octubre del año de mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por los Estados Unidos
Mexicanos:
[Signed — Signé]¹

Por la República
Argentina:
[Signed — Signé]²

¹ Signed by Fernando Solana — Signé par Fernando Solana.

² Signed by Domingo Cavallo — Signé par Domingo Cavallo.

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND
THE ARGENTINE REPUBLIC ON THE TRANSFER OF SEN-
TENCED NATIONALS AND THE EXECUTION OF PENAL SEN-
TENCES

The Government of the United Mexican States and the Government of the Argentine Republic, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to promote mutual cooperation in respect of penal justice,

Being of the view that the purpose of a sentence is to reintegrate the persons sentenced into society,

Considering that that objective would be served by enabling nationals who are deprived of their liberty abroad as a result of the commission of an offence to serve their sentence in the country of their nationality,

Have agreed as follows:

Article I

1. Sentences imposed in Mexico on nationals of the Argentine Republic may be served in Argentina in accordance with the provisions of this Agreement.
2. Sentences imposed in Argentina on nationals of the United Mexican States may be served in Mexico in accordance with the provisions of this Agreement.
3. Nationality status shall be considered at the time of the application for transfer.

Article II

For the purposes of this Agreement:

- (a) “Sentencing State” means the Party which sentenced the offender and from which the offender is to be transferred.
- (b) “Receiving State” means the Party to which the offender is to be transferred.
- (c) “Offender” means the person who is serving a sentence involving deprivation of liberty in a penal establishment.

Article III

The Parties shall notify each other through the diplomatic channel of the authority that will be responsible for performing the functions provided for in this Agreement.

¹ Came into force on 9 March 1992, the date of receipt of the last of the notifications by which the Parties informed each other of the completion of their respective constitutional procedures, in accordance with article 17 (1).

Article IV

Action may be taken in the manner set forth in this Agreement only under the following conditions:

(a) That the sentence is final and definitive, in other words, that no legal proceedings, not even an extraordinary appeal or review proceedings, are pending;

(b) That the sentence is not a sentence of death, except where it has been commuted;

(c) That the duration of the sentence being served is specified in the judgement or has been fixed subsequently by the competent authority;

(d) That more than two years of the sentence remain to be served at the time when the application is made;

(e) That the offender has paid any fines, legal expenses, civil damages or pecuniary penalties of any kind for which he is liable under the terms of the sentence; or that he guarantees payment thereof to the satisfaction of the sentencing State.

Article V

1. The competent authorities of the Parties shall inform all offenders who are nationals of the other Party of the option available to them, under this Agreement, and of any possible legal consequences of the transfer.

2. If the offender so requests, he may contact the Consul of his country who, in turn, may contact the competent authority of the sentencing State to request the preparation of the background documentation and studies relating to the offender.

3. The offender's wish to be transferred shall be specifically expressed in writing. The sentencing State shall give the receiving State an opportunity, if the latter so requests, to verify that the offender is aware of the legal consequences of the transfer and that his consent is being given voluntarily.

Article VI

1. The application for transfer shall be made by the receiving State to the sentencing State through the diplomatic channel.

2. Before applying for the transfer, the receiving State shall weigh the offence for which the offender was sentenced, his previous criminal record, his state of health, any connections which the offender may have with the society of the receiving State and any other circumstance that may be regarded as a positive factor for the social rehabilitation of the offender in the event of his serving his sentence in the receiving State.

3. It shall be entirely up to the discretion of the receiving State whether or not to make the application for transfer to the sentencing State.

Article VII

1. The sentencing State shall study the application and shall communicate its decision to the receiving State.

2. The sentencing State may deny authorization for the transfer without stating the reason for its decision.

3. If authorization for the transfer is denied, the receiving State may not make a further application; however, at the request of the receiving State, the sentencing State may review its decision.

Article VIII

1. If the application is approved, the Parties shall agree on a place and date for the offender to be handed over and on the manner in which the transfer is to be effected.

The receiving State shall be responsible for guarding and transporting the offender from the moment he is handed over.

2. The receiving State shall not be entitled to any reimbursement for expenses incurred by it in the transfer or execution of the sentence in its territory.

3. The sentencing State shall furnish to the receiving State certified copies of the sentence and any other documentation that may be necessary for the execution of the sentence. If the receiving State so requests, such certified copies and documentation shall be authenticated.

4. If the receiving State considers that the documents supplied by the sentencing State are not sufficient to enable it to implement this Agreement, it may request additional information.

5. At the request of the sentencing State, the receiving State shall furnish reports on the status of execution of the sentence of the offender transferred in accordance with this Agreement, including reports on conditional release or parole.

Article IX

An offender who has been transferred may not be tried again in the receiving State for the same offence which gave rise to the sentence imposed by the sentencing State and to his subsequent transfer.

Article X

1. The sentencing State shall have exclusive jurisdiction in respect of any new proceedings, regardless of their form, intended to quash, modify or set aside sentences handed down by its courts.

2. The sentencing State alone may grant an amnesty or pardon, or review, remit or commute the sentence imposed.

3. Should it do so, it shall notify the receiving State of its decision, and inform it of the consequences which the decision has under the legislation of the sentencing State.

4. The receiving State shall immediately take such measures as may be required by such consequences.

Article XI

The execution of the sentence, including the conditions for the granting and revocation of early or supervised conditional release or parole, shall be governed by the laws of the receiving State.

Article XII

The receiving State shall not execute any prison sentence in such a way as to prolong the duration of the deprivation of liberty beyond the term of imprisonment imposed by the sentence of the court of the sentencing State.

Article XIII

1. If a national of one Party is serving a sentence imposed by the other Party under the regime of early or supervised conditional release or parole, he may serve the sentence under the supervision of the authorities of the receiving State.

2. The judicial authority of the sentencing State shall request the relevant measures of supervision by means of a letter rogatory served through the diplomatic channel.

3. For the purposes of this article, the judicial authority of the receiving State may take the measures of supervision requested, shall keep the requesting authority informed of the manner in which those measures are being carried out and shall notify it immediately of any non-compliance by the convicted person with the obligations he has undertaken.

Article XIV

No provision of this Agreement shall be interpreted as limiting any powers which the Parties may have, independently of this Agreement, to grant or accept the transfer of a juvenile offender.

Article XV

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and to establish adequate administrative procedures to fulfil the purposes of this Agreement.

Article XVI

This Agreement shall apply to the execution of sentences imposed either before or after its entry into force.

Article XVII

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last diplomatic note by which the Parties notify each other of their compliance with the respective constitutional requirements.

2. This Agreement shall have an indefinite duration. Either party may terminate it by giving written notice through the diplomatic channel. The termination shall take effect one hundred and eighty (180) days after such notice has been given.

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the Parties, being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE at Buenos Aires, on 8 October 1990, in two original copies, both texts being equally authentic.

For the United Mexican States:
[FERNANDO SOLANA]

For the Argentine Republic:
[DOMINGO CAVALLO]

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AU TRANSFÈREMENT DES RESSORTISSANTS CONDAMNÉS ET À L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES

Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés « les Parties »;

Désireux de favoriser la coopération mutuelle en matière de justice pénale;

Estimant que l'objectif des peines est la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que pour atteindre cet objectif, il y aurait intérêt à donner aux nationaux privés de leur liberté à l'étranger pour avoir commis un délit, la possibilité de purger leur condamnation dans le pays de leur nationalité;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Les peines infligées au Mexique à des nationaux de la République argentine pourront être purgées en Argentine conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les peines infligées en Argentine à des nationaux des Etats-Unis du Mexique pourront être purgées au Mexique conformément aux dispositions du présent Accord.

3. La qualité de national sera considérée au moment de la demande de transfèrement.

Article II

Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Etat de jugement », la Partie qui a condamné le délinquant et à partir de laquelle le délinquant devra être transféré;

b) « Etat d'accueil », la Partie vers laquelle le délinquant devra être transféré;

c) « Délinquant », la personne qui purge une sentence condamnatoire à une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire.

Article III

Les Parties se communiqueront par la voie diplomatique le nom de l'autorité qui sera chargée d'exercer les fonctions prévues dans le présent Accord.

¹ Entré en vigueur le 9 mars 1992, date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties se sont informées de l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.

Article IV

Pour qu'il puisse être procédé en la forme prévue par le présent Accord, les conditions suivantes devront être réunies :

a) Le jugement doit être ferme et définitif, c'est-à-dire qu'aucun recours légal quelconque ne doit être pendant, y compris les procédures extraordinaires d'appel ou de révision;

b) La condamnation ne doit pas être une condamnation à mort, à moins que celle-ci ait été commuée;

c) La peine purgée par le délinquant doit avoir une durée déterminée dans la sentence condamnatrice ou doit avoir été fixée postérieurement par l'autorité compétente;

d) La partie de la condamnation qui reste à purger au moment de faire droit à la demande doit être supérieure à deux ans; et

e) Le délinquant doit avoir satisfait au paiement des amendes, frais de justice, dommages civils ou condamnation pécuniaire de toute nature mis à sa charge conformément aux dispositions de la sentence condamnatrice; ou en garantir le paiement à la satisfaction de l'Etat de jugement.

Article V

1. Les autorités compétentes des Parties informeront tout délinquant qui est un national de l'autre Partie de la possibilité qui lui est offerte en application du présent Accord, et des conséquences juridiques entraînées par le transfèrement.

2. S'il en fait la demande, le délinquant pourra communiquer avec le Consul de son pays, lequel, à son tour, pourra entrer en contact avec l'autorité compétente du pays de jugement, pour demander que soient établis les antécédents et les documents correspondants du délinquant.

3. La volonté du délinquant d'être transféré devra être manifestée par écrit de manière expresse. L'Etat de jugement devra donner à l'Etat d'accueil, s'il en fait la demande, les moyens de vérifier que le délinquant est au courant des conséquences juridiques qu'entraîne le transfèrement et qu'il donne son consentement de sa propre volonté.

Article VI

1. La demande de transfèrement devra être effectuée par l'Etat d'accueil à l'Etat de jugement par la voie diplomatique.

2. Pour se prononcer sur la demande de transfèrement, l'Etat d'accueil évaluera le délit pour lequel le délinquant a été condamné, ses antécédents pénaux, son état de santé, les liens qui rattachent le délinquant à la société de l'Etat d'accueil, et toute autre circonstance qui pourrait être considérée comme un facteur positif pour la réhabilitation sociale du délinquant s'il purgeait sa condamnation dans l'Etat d'accueil.

3. L'Etat d'accueil a discrétion absolue pour faire droit ou non à la demande de transfèrement vers l'Etat de jugement.

Article VII

1. L'Etat de jugement examinera la demande et communiquera sa décision à l'Etat d'accueil.
2. L'Etat de jugement pourra refuser l'autorisation de transfèrement sans avoir à motiver sa décision.
3. En cas de refus de l'autorisation de transfèrement, l'Etat d'accueil ne pourra présenter une nouvelle demande, mais l'Etat de jugement pourra réviser sa décision, à la demande de l'Etat d'accueil.

Article VIII

1. Si la demande est approuvée, les Parties conviendront du lieu et de la date de la remise du délinquant et de la forme dans laquelle s'effectuera le transfèrement. L'Etat d'accueil sera responsable de la garde et du transport du délinquant à partir du moment de la remise.
2. L'Etat d'accueil n'aura droit à aucun remboursement pour les frais exposés pour le transfèrement ou l'exécution de la condamnation sur son territoire.
3. L'Etat de jugement fournira à l'Etat d'accueil les minutes du jugement et les autres documents qui pourraient être nécessaires pour l'exécution de la condamnation. Ces minutes et documents devront être légalisés si l'Etat d'accueil en fait la demande.
4. Si l'Etat d'accueil estime que les renseignements transmis par l'Etat de jugement sont insuffisants pour lui permettre le présent Accord, il peut demander des renseignements complémentaires.
5. A la demande de l'Etat de jugement, l'Etat d'accueil transmettra des rapports sur l'état d'exécution de la condamnation du délinquant transféré conformément au présent Accord, y compris en ce qui concerne sa liberté conditionnelle ou préparatoire.

Article IX

Le délinquant transféré ne pourra être à nouveau jugé dans l'Etat d'accueil pour le délit ayant motivé la condamnation infligée par l'Etat de jugement et son transfèrement postérieur.

Article X

1. L'Etat de jugement aura juridiction exclusive en ce qui concerne toute procédure, quel qu'en soit le caractère, qui aurait pour objet d'annuler, de modifier ou rendre sans effet les jugements prononcés par ses tribunaux.
2. Seul l'Etat de jugement pourra accorder l'amnistie, la remise, la révision, la grâce ou la commutation concernant la condamnation infligée.
3. Si l'Etat de jugement prend une telle décision, il communiquera cette décision à l'Etat d'accueil en l'informant des conséquences que produit la décision adoptée selon la législation de l'Etat de jugement.
4. L'Etat d'accueil devra prendre immédiatement les mesures correspondant aux conséquences en question.

Article XI

L'exécution du jugement sera régie par les lois de l'Etat d'accueil, y compris les conditions prévues pour l'octroi et la révocation de la liberté conditionnelle ou préparatoire, anticipée ou surveillée.

Article XII

Aucune condamnation à une peine de prison ne sera exécutée par l'Etat d'accueil de telle manière qu'elle prolonge la durée de privation de liberté au-delà de la période d'emprisonnement infligée par le jugement du tribunal de l'Etat de jugement.

Article XIII

1. Si un national d'une Partie purge une condamnation infligée par l'autre Partie sous le régime de la condamnation conditionnelle ou de la liberté conditionnelle ou préparatoire, anticipée ou surveillée, il pourra purger ladite condamnation sous la surveillance des autorités de l'Etat d'accueil.

2. L'autorité judiciaire de l'Etat de jugement demandera les mesures de surveillance applicables, au moyen d'une commission rogatoire qui sera adressée par la voie diplomatique.

3. Aux fins du présent article, l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil pourra prendre les mesures de surveillance demandées et tiendra au courant l'autorité ayant délivré la commission rogatoire, concernant la manière dont ces mesures sont menées à bien, et l'avisera immédiatement en cas de non-exécution par le condamné des obligations contractées par ce dernier.

Article XIV

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme limitant la faculté que les Parties peuvent avoir, indépendamment du présent Accord, d'accorder ou d'accepter le transfèrement d'un délinquant mineur.

Article XV

Les Parties s'engagent à prendre les mesures législatives nécessaires et à établir les mécanismes administratifs adéquats pour l'exécution des dispositions du présent Accord.

Article XVI

Le présent Accord peut être appliqué à l'exécution des jugements prononcés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

Article XVII

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties se notifieront qu'elles ont satisfait aux exigences constitutionnelles respectives.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie. Chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant notification écrite par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt (180) jours après la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord.

FAIT à Buenos Aires, le 8 octobre 1990, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour les Etats-Unis du Mexique :
[FERNANDO SOLANA]

Pour la République argentine :
[DOMINGO CAVALLO]
